

y protege al C. Manuel Lopez Martinez, contra los procedimientos del Ayuntamiento de Tecamachalco, en virtud de los cuales fué destituido del cargo de Juez suplente del Tribunal correccional de la misma Villa.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Terc.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Aza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 18 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por María Asuncion Gonzalez á nombre de su hijo Francisco Alvarado, contra el Prefecto político de Morelia, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Con fecha 27 del próximo pasado se presentó ante este juzgado María Asuncion Gonzalez, madre de José Francisco Alvarado, exponiendo: que hacia ocho dias habia sido aprehendido su hijo en el pueblo de Tacicuaro por orden de esta Prefectura y puesto en la cárcel por sospechas de plagio; que despues fué consignado al servicio de las armas, sin que se le hubiera admitido por estar inutilizado; que con estos procedimientos cree la quejosa violadas en la

TOMO VI.—PARTE II.

persona de su hijo, las garantías que otorga la Constitución federal en sus arts. 16, 18 y 19; y por lo mismo pide se decrete en su favor el amparo que solicita de la Justicia federal.

Dado á este escrito el tesoro de ley, informó el C. Prefecto que efectivamente, un piquete de policía aprehendió en Tacicuaro como sospechoso al citado Alvarado, y que habiéndose conocido que pertenecía al ejército, se consignó á la Mayoría de C. d. nos, lo que lo devolvió á la Prefectura por encontrarse ya inútil para el servicio de las armas. Que en los dias en que esto pasaba fué denunciado el quejoso como ladrón de camino real, por lo que lo estaba juzgando con arreglo á la ley de 3 de Mayo anterior. A este informe no se acompaña constancia alguna.

Obligado el que suscribe á pedir sobre lo principal, conforme á la segunda parte del art. 9º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y dando el caso por comprendido en la fraccion 1ª de su art. 1º, exponer que teniendo el informe del C. Prefecto el carácter de oficial, debe estarse á él mientras no haya comprobantes que lo desvirtúen, por lo que el fiscal, á reserva de reformar su opinion, pide por ahora que se decrete no haber lugar al amparo solicitado, por estar funcionando el C. Prefecto dentro de la órbita de sus facultades que le señala la ley de 3 de Mayo citada en su informe, sin hacer condenacion en la multa por la notoria insolvencia de la parte quejosa.

Morelia Diciembre 8 de 1873.

Es copia que certifico. Morelia, Diciembre 20 de 1873.—*Isidro Alemán*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Diciembre 16 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por María Asuncion Gonzalez á nombre de su hijo Francisco Alvarado, contra el C. Prefecto de esta Capital, por creer violadas en la per-

sona de aquel, las garantías que otorgan los arts 16, 18 y 19 de la Constitución general con la providencia de aquel funcionario, por la que Alvarado fué reducido á prision, y Considerando: que la misma Gonzalez en su escrito de queja manifiesta, que la autoridad referida procedió contra aquel por sospechas de saltador, y que el C. Prefecto consigna en su informe, que procedió á la prision del repetido Alvarado, por imputársele complicidad en el asalto que una gavilla de ladrones dió á unos reboceros en el cerro de la Aguila, y que va á ser juzgado conforme á la ley general de 8 de Mayo de este año; y estando suspensas por dicha ley para los acusados de los delitos de robo con asalto y plagio, las garantías que otorgan los arts. 19 y 20 de la Constitución, y no habiendo infringido las del 16, invocadas por el quejoso, como pide el C. Promotor fiscal y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Alvarado, contra la providencia del C. Prefecto de esta Capital, por la que lo redujo á prision para juzgarlo por saltador, no imponiéndosele la multa de la ley de 20 de Enero citada, por su notoria insolvencia.

Hágase saber este fallo, publíquese en los periódicos, remítase copia de él al Semanario Judicial y los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Lo decretó definitivamente juzgando, el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan, Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí, *Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Diciembre 20 de 1872.—*Isidro Aleman*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

Mexico, Agosto 17 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por María de la Asuncion Gonzalez, por su hijo Francis-

co Alvarado, contra el procedimiento del Gefe político de Morelia, que retiene en prision á su hijo, con violacion de las garantías que otorgan los arts. 16, 18, 19 y 20 de la Carta fundamental de la República, sobre cuyo hecho informa el Prefecto político, que Alvarado fué aprehendido como sospechoso, y que con este motivo, habiéndose practicado una averiguacion sobre sus antecedentes se vino en conocimiento de que habia pertenecido al ejército, por lo que fué consignado á la autoridad militar respectiva, que no lo admitió por inútil para el servicio, devolviéndolo á la Prefectura, de orden de la cual se encuentra preso desde entonces en espera de los informes que se tienen pedidos á la Jefatura política de Morelion, sobre el asalto y robo de unos reboceros, verificado en ese Distrito, y en el que aparece complicado el quejoso, y

Considerando: que la aprehension de Alvarado fué, no por determinado delito sino por la simple sospecha de que pudiera ser un malhechor, constituye una violacion del art. 16 de la Carta fundamental que prohibe inferir cualquiera molestia personal sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento.

Que es igualmente anticonstitucional la detencion indefinida que se hace sufrir al mismo Alvarado sin haberse dictado auto motivado de prision en su contra, ni haberlo tomado declaracion preparatoria dentro de los términos prescritos por los arts. 19 y 20 de la Constitución, sin que obste, que para los saltadores estan suspensas esas garantías, pues no lo han sido en lo absoluto, sino únicamente en la causa que se les forme por tal delito; y segun aparece del informe de la autoridad política, aun no se habia iniciado contra Alvarado la causa correspondiente al asalto de que se le acusa, en espera de las noticias que se tienen pedidas al Gefe político de Morelion.

Por cuyas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito, pronunciada en 16 de Diciembre del año pasado, que declaró no haber lugar al amparo federal.

Segundo: que la Justicia de la Union ampara y protege á Francisco Alvarado, contra el procedimiento del Prefecto político de Morelia que lo retiene en prision sin seguirle causa formal.

Tercero: la declaracion anterior no impide proceder contra el acusado, si se obtuvieren ó se hubieren obtenido las constancias necesarias para instruirlo la causa por el delito de asalto de que se le hace cargo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*I. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 2 de 1874.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por D. Vicente de la Serna, en representacion del C. Pedro Prisco Ortíz y D^a Faustina Ramos, contra el Ayuntamiento de Cuautitlan, que ordenó á los quejosos reconstruir un puente.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el C. Vicente de la Serna, representando al de igual

clase Pedro Prisco Ortíz y á D^a Faustina Ramos, con fecha 20 de Enero último, solicita amparo de garantías contra el Ayuntamiento de Cuautitlan, que estorbó á los quejosos la destruccion de un puente formado de madera y cubierto con tierra, que se halla en terrenos de su propiedad, y cuyo puente lo mandaron quitar á virtud de que se han considerado con ese derecho, del cual les privó la citada autoridad municipal, disponiendo su reconstruccion.

En vista de las constancias de los autos y relacionando los hechos sostenidos por parte de la autoridad responsable, con los que han justificado los peticionarios, el acto reclamado puede reducirse á estos términos.

D. Pedro Prisco Ortíz y D^a Faustina Ramos, son propietarios cada uno de un terreno situado en el barrio de San José, en la Villa de Cuautitlan, dividiendo ambas propiedades un rio. Para facilitar el paso, los mismos propietarios formaron el puente de que se ha hecho mencion, y de él se han servido los vecinos de las inmediatas heredades, transitándolo, segun el Ayuntamiento, de época inmemorial.

Los quejosos, no queriendo ya consentir en el uso de aquel puente para que se sirvieran de él los vecinos de los barrios inmediatos, lo mandaron destruir; y cuando el Ayuntamiento tuvo conocimiento de ese hecho, lo mandó construir de nuevo, imponiendo una multa á las personas que lo habían destruido.

El Sr. D. P. Prisco Ortíz y la Señora Ramos, sostienen: que la autoridad municipal no dejándolos obrar con libertad para quitar el relacionado puente, los molesta en sus posesiones, violando así las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitucion general.

El que habla, no tiene el mismo concepto que los quejosos han formado del acto que motiva el presente juicio, pues el artículo citado, aplicándolo á la presente cuestion, puede decirse, que el Ayuntamiento de Cuautitlan, con el hecho de mandar re-